



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 45.459/2022

**“MASSALIN PARTICULARES SRL c/ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de esta Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud de la impugnación interpuesta por MASSALIN PARTICULARES SRL contra la decisión administrativa N° 2247-E-2022 a través de la cual se le intima el pago de una deuda de \$ 2.730.474,18 en concepto de capital, \$ 3.694.170,95 en concepto de contribuciones, \$ 13.988.267,08 por intereses y sendas multas por \$ 295.366,48 y \$12.553.923,74 atento considerarla **deudora de cotizaciones impagas al sistema de seguridad social en virtud de las actividades efectuadas por profesionales que prestaron servicios en su establecimiento de la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires.**

La recurrente manifiesta que los profesionales involucrados -María Teresa Rossello, Noemí L. Livani, Eduardo Fabián Caputo, Oscar Ángel Scotellaro, Guillermo Naveiro, Silvia Bracken, Rubén Iglesias y Luciano Biasutti- no son dependientes suyos sino profesionales autónomos con los que se vinculó bajo una figura civil -contrato de prestación de servicios- sin que exista subordinación jurídica, económica o técnica que legitime lo actuado por los inspectores del organismo.

Sin perjuicio de lo anterior plantea la nulidad del proceso administrativo realizado en contra de sus intereses por estimarlo viciado.

Desde el punto de vista procesal, la empresa **apelante dio cumplimiento** a la exigencia prevista por el art. 15 de la ley 18.820 por lo que corresponde la apertura de la presente instancia.

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento corresponde, en primer término, analizar el reproche de nulidad formulado contra la validez de la conducta del ente de control.

Entiendo que no resultan viables los cuestionamientos efectuados en la materia pues lo actuado responde a los lineamientos impartidos por el art. 7° de la ley 19.549.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37075389#357199120#20230407200302705



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

En efecto, fueron los inspectores de AFIP –cuya competencia no se discute– quienes labraron las actas de inspección e infracción de conformidad a lo normado por los arts. 35 de la ley 11.683, 10 de la ley 18.820 y 23 del decreto 507/1993, iniciando un proceso administrativo que transcurrió en legal forma y donde la empresa fiscalizada tuvo oportunidad de ser oída, producir prueba y obtener una resolución administrativa fundada que es lo que se cuestiona ante esta instancia.

Lo anterior revela, a mi juicio, que en autos se respetaron los lineamientos del debido proceso legal, habiéndose abstenido el ente de control de toda vía de hecho lesiva de los intereses de la apelante (art. 9º, ley 19549). No podemos olvidar que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad (art. 12, ley 19.549) y que, por otra parte, su anterior cuestionamiento tuvo un éxito parcial dado que el organismo actuante consideró que los servicios desempeñados por el abogado Carlos Suárez no habían sido dependientes (ver dictamen 684/22 cuyos términos fueron compartidos en la resolución 2247/22) aquí atacado.

En virtud de lo anterior, ni las actas de infracción, ni lo actuado en sede administrativa resultan violatorios del art. 7º de la ley 19.549, no pudiendo negarse que en un estado de Derecho, el Poder Administrador ejerza funciones de control y fiscalización sobre la actividad productiva, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas vigentes.

Se ha señalado, al respecto, que las facultades de la policía del trabajo no se reducen a la actividad de comprobación, sino que es más amplia, comprendiendo acciones de prevención, investigación y de aplicación de sanciones (Pirolo, Miguel A., “Derecho del Trabajo Comentado” Tº IV pág. 846, ed. La Ley; Vázquez Vialard, Antonio, “Naturaleza y caracteres de la función que desarrolla la Administración Laboral” LT Tº XX pág. 957/965).

En cuanto a la existencia de deuda de aportes y contribuciones, las constancias de autos revelan que la apelante –importante corporación dedicada a la actividad tabacalera– organizó, en su establecimiento productivo de la localidad de Merlo, un departamento de profesionales médicos dedicados a prestar servicios de atención y auxilio a los dependientes de dicha planta. Lo hizo designando como profesional responsable o jefe médico al Dr. Ricardo Álvarez al que incorporó como personal dependiente. El citado era el encargado de organizar el cuerpo de profesionales de manera de asegurar que, durante las veinticuatro horas del día y durante los trescientos sesenta y cinco días del año, los trabajadores pudieran ser asistidos y monitoreados en su estado de salud de acuerdo a lo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

dispuesto por las leyes 19.587 -de seguridad e higiene- y 24.557 –ley de riesgos del trabajo- y sus modificatorias.

En el caso, la mayoría de las personas individualizadas en autos como dependientes -salvo Noemi Liliana Livani- prestaron servicios médicos profesionales como integrantes de dicho departamento bajo la directiva del citado Dr. Álvarez quien determinaba el horario de trabajo y las prestaciones a realizar, que eran compensadas patrimonialmente según el tiempo de servicios y conforme la facturación emitida por el profesional médico actuante. Todos ellos estaban inscriptos como monotributistas.

Cabe recordar que Biasutti prestó servicios como médico clínico, Bracken como psicóloga, Caputo como médico legista, Iglesias realizando prestaciones en el consultorio como así también, visitas médicas a los operarios -conf. obligación de control que impone el art. 210 LCT-, Naveiro prestando servicios en el consultorio y de guardia fijas, Scotellaro, prestando servicios de guardia nocturna y Rosello como fonoaudióloga.

Los citados servicios profesionales fueron conceptualizados por el organismo como subordinados en los términos del art. 21 de la LCT, lo que discute la impugnante, manifestando que no existió subordinación jurídica, económica ni técnica que permita aplicar la legislación laboral y hacerla responsable del pago de las cotizaciones previsionales exigidas.

El artículo 21 de la LCT establece que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres.

Ahora bien, en el caso de los profesionales involucrados, si bien gozaban de autonomía funcional –se trata de profesionales del arte de curar no necesitando ser instruidos en sus funciones- un superior, también profesional, dirigía el departamento, por lo que debían respetarse determinados lineamientos y normas de conducta.

Tal situación no es, a mi juicio, reveladora de independencia jurídica, pues dichos profesionales cumplieron sus prestaciones siguiendo un organigrama establecido por un superior con el objeto de asistir médicamente a los trabajadores de MASSALIN PARTICULARES SRL.

Como contrapartida no advierto la configuración de subordinación económica a la entidad recurrente pues no nos encontramos ante trabajadores





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

manuales que desempeñaban tareas en la actividad específica de la demandada -industria tabacalera- sino que lo hacían en virtud de directivas jurídicas que obligan a las empresas a instalar, en sus establecimientos productivos, un departamento médico para enfrentar contingencias laborales y fiscalizar el estado de salud de sus dependientes. Los profesionales de que se trata estaban inscriptos y facturaban sus servicios como monotributistas y, lo más importante, es que, ante terceras empresas, se presentaban como trabajadores autónomos. Es más, en la mayoría de los casos tenían su propio consultorio médico. Tal es lo que sucede con Rosello -quien trabajó para Cadbury Stani, Extpel y QBR ART efectuando las mismas prestaciones que las usufructuadas por la recurrente-, Caputo -quien es cirujano, explota su propio consultorio particular y presta servicios en el Hospital de Merlo para la Policía Federal, en beneficio de obras sociales y aseguradoras de riesgo del trabajo-, Scotellaro entró en pasividad tras prestar servicios en el Hospital de Merlo y explota su propio consultorio para atender pacientes privados y de obras sociales, Naveiro, quien se desempeña como médico legista de la Policía de la Ciudad y trabajó como médico laboral para otras empresas, Bracken quien explota su propio consultorio y trabaja como psicóloga para otras entidades y Biasutti quien es asesor de empresas petroleras tales como Pampa Energía, Plus Petrol y Transportadora Gas del Norte.

Si bien la exclusividad no constituye una característica esencial del negocio jurídico laboral, una situación como la presentada por los profesionales citados revelan que han utilizado su conocimiento médico para insertarse en el mercado de la salud en forma autónoma, facturando sus prestaciones profesionales y prestando servicios para una multiplicidad de empresas, lo que obsta, bajo el principio de primacía de la realidad, a que el vínculo habido con MASSALIN PARTICULARES SRL pueda ser tipificado como un contrato de trabajo.

Al respecto, nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha señalado que la figura de la locación de servicios no ha sido abrogada por la legislación laboral constituyendo una figura típica y habitual dentro el ámbito de los servicios profesionales (CSJN “Rica, Carlos Martin c/Hospital Alemán y otros s/Despido” sent. del 24/04/2018 Fallos 341:427; “Harlap, Ana María c/OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios s/Despido” sent. del 22/04/2021, Fallos 344:711; CFSS, Sala II, sent. del 030/9/21, “Fundación Científica del Sur c/Ministerio de Producción y Trabajo s/impugnación de deuda”).

Lo señalado anteriormente no es aplicable con respecto a Rubén Iglesias pues, en su memorial recursivo, la apelante no brinda explicaciones sobre la situación concreta de dicha persona. En otras palabras, no se cumple con la carga





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

procesal de realizar una crítica concreta y razonada de la decisión adversa puntualizando los errores cometidos por el ente de control (art. 265 CPCCN).

Con respecto a la situación de Noemí Liliana Livani se impone confirmar lo decidido. Ello por cuanto, dicha persona sin perjuicio de haber trabajado en una escribanía, no prestó tareas de carácter profesional sino de tipo administrativo -gestión de trámites, visas de los empleados que viajaban por negocios- se inscribió como monotributista a pedido de la empresa y facturaba sus prestaciones de acuerdo al monto sugerido por la apelante lo que revela la existencia de subordinación económica, sin que se demostrara la existencia de capacidad profesional que permita considerarla como una colaborada autónoma, por lo que en este aspecto entiendo que corresponde confirmar lo decidido en sede administrativa.

Por último, y en lo referente a la regulación de honorarios atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 133 UMA (\$ 1.986.089), y los correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada se fijan en 56 UMA (\$ 836.248), conforme CSJN Ac. 09/2023.

Por lo expuesto propongo se declare habilitada la instancia judicial, se deje sin efecto las cotizaciones y multas impuesta por la contratación de Maria Teresa Rossello, Eduardo Fabián Caputo, Oscar A Scotellaro, Guillermo Naveiro, Silvia Bracken y Luciano Biasutti, confirmando la misma en cuanto tipifica como dependientes las prestaciones desempeñadas por Rubén Iglesias y Noemi Liliana Livani. Imponer las costas en el 70% a cargo de la demandada y en el 30% restante a cargo de la parte actora (art. 71 del CPCCN) y regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 133 UMA (\$ 1.986.089), y los honorarios de la dirección letrada de la demandada se establecen en 56 UMA (\$ 836.248), conf. CSJN. Ac. 09/2023, importes a los que se adicionara IVA en caso de corresponder (CSJN “Compañía General de Combustibles” sent. del 16/06/2003).

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Comparto lo expresado por mi distinguido colega de Sala en cuanto al fondo de la cuestión litigiosa, pero debo disentir en lo referente a la regulación de honorarios.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37075389#357199120#20230407200302705



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Sabido es que la ley 27423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica, pues dicho cuerpo legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y dado lo elevado de la base regulatoria, corresponde a los jueces, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1.255 del Cód. Civ. y Cial de la Nación, fijar los mismos de acuerdo a la importancia, complejidad y eficacia de la tarea realizada para así arribar a una solución justa y medida acorde a las particulares circunstancias de cada caso (conf. CSJN Fallos 328:94; 332:2797 y causa “Villalonga Furlong SA c/ENCOTEL s/Contrato Administrativo” sent. del 08/06/2010).

Por lo anterior entiendo conveniente establecer los honorarios de representación letrada de la parte actora en 15 UMA (\$ 223.995) y en lo referente a los honorarios de la representación letrada de la parte demandada se fijan en 10 UMA (\$ 149.330) conf. CSJN Ac. 09/2023, importes a los que se les adicionará IVA en caso de corresponder. Así lo voto.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto del Doctor Walter F. Carnota.

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1) Declarar habilitada la instancia judicial, 2) Dejar sin efecto las cotizaciones y multas impuesta por la contratación de Maria Teresa Rossello, Eduardo Fabián Caputo, Oscar A Scotellaro, Guillermo Naveiro, Silvia Bracken y Luciano Biasutti, 3) Confirmarla en cuanto tipifica como dependientes las prestaciones desempeñadas por Rubén Iglesias y Noemi Liliana Livani, 3) Imponer las costas en un 70% a cargo de la demandada y en el 30% restante a cargo de la parte actora (art. 71 del CPCCN) y 4) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 133 UMA (\$ 1.986.089), y los honorarios de la dirección letrada de la demandada se establecen en 56 UMA (\$ 836.248), conf. CSJN. Ac. 09/2023, importes a los que se adicionara IVA en caso de corresponder. Regístrese, protocolícese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara
ALP.

.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EL DOCTOR JUAN FANTIINI ALBARENQUE DIJO:

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

